

## 1. La guerra al crimen organizado<sup>1</sup>

*Felipe Calderón Hinojosa*

En 90 minutos de plática, queda claro que el mandatario tiene una obsesión. Aunque atiende con especial énfasis la crisis económica, y no deja de medir el ambiente político, sus desvelos son por la guerra contra el narcotráfico. El semblante risueño del presidente y sus modos relajados parecerían corresponder a los de un mandatario de otro país, uno en el cual no hay por lo menos 20 ejecutados diarios o una crisis que comienza a ser galopante. Pero tan pronto comienza a hablar, se advierte hasta qué punto el tema de la guerra contra el narcotráfico se ha convertido en una obsesión para Felipe Calderón: “El crimen organizado busca el control territorial”, advierte el mandatario; será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco, dice. No hay regreso; son ellos o nosotros.

*JZP: El día de la bandera, usted anunció con bombo y platillo “el punto final” de la batalla al crimen organizado. Pero no se dio a conocer alguna nueva estrategia para combatirlo, lo cual provoca incredulidad. Después de más de dos años de lucha contra los cárteles, ¿por qué habría de creerse que ahora tendríamos éxito?*

**FCH:** Es una decisión de gobierno, que debe ser una decisión de país. Mientras haya adicciones y demanda, tráfico y consumo de drogas, no puede terminarse, claro. Pero debemos enfocarnos en el crimen organizado y otros delitos vinculados a éste. Lo importante aquí es la decisión clave como país de hacerle frente y reducir ese problema, de manera tal que permita una convivencia ordenada y tranquila de los mexicanos.

*JZP: Pero entonces no hay una modificación o un giro de la estrategia en el combate al crimen organizado. Se trata simplemente del anuncio de un acto de voluntad política. Pero eso nunca lo habíamos puesto en duda, porque usted lo ha encarado desde el principio de su gobierno.*

**FCH:** El elemento clave en la etapa que estamos pasando es precisamente una expresión de voluntad política que a mi juicio hace falta. No sólo se trata de frasearla o expresarla, sino verdaderamente llevarla adelante. Pero tampoco se descarta un replanteamiento de fondo de la propia estrategia que siempre requiere, a mi juicio, una revisión constante. La estrategia está planteada sobre dos horizontes: uno de muy corto plazo que consiste en reposicionar la autoridad y la potestad del Estado mediante la movilización de la fuerza pública y el ejército. No podemos perder territorios en entidades federativas donde se ha vulnerado la autoridad. Pero el elemento detonante es

<sup>1</sup> Extractos de la entrevista de Jorge Zepeda Patterson, *El Universal*, 27 de febrero de 2009.

el largo plazo, y eso implica una estrategia de reconstrucción institucional completa: no sólo de las estructuras policíacas sino de las propias estructuras públicas. Eso implica la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos, la generación de nuevos sistemas de información e inteligencia, un nuevo marco institucional legal, como el que hemos planteado al Congreso de la Unión. Primero la reforma constitucional y luego la reforma legal. Y además, desde luego, una nueva orientación enfocada a la prevención que aún no hemos tenido en el país y que vale la pena darle mayor acento.

*JZP: Transmite usted la sensación de estar convencido de que otros poderes no comparten esta voluntad política. ¿Se siente sólo frente a este cometido? De eso se trató la última reunión con los gobernadores, ¿no?*

FCH: Ese fue el tono de esa conversación privada que tuvimos con los gobernadores, porque así lo planteó la propia dirigencia del PRI. Fue una conversación muy enriquecedora y lo que yo recojo es el compromiso al que arribamos, de trabajar todos juntos. El propio secretario general del PRI, Murillo Karam, dijo: “presidente, sabemos que, o le entramos todos o no sale nadie”. Y yo me quedaría con eso. No juzgo a otras esferas de gobierno y partidos. Simple y sencillamente hago patente la voluntad del gobierno federal para luchar decididamente contra la delincuencia. Eso sí, vale la pena que cada quien revise en su ámbito de responsabilidad, el grado de compromiso en el combate a la criminalidad; en algunos estados esta contundencia y grado de compromiso ha estado presente pero en otros no.

*JZP: Hay una preocupación creciente por el tema de los daños colaterales que deja la lucha contra los cárteles: la violación de derechos humanos. Esta semana se hizo público un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos que constituye prácticamente un regaño a México en ese sentido.*

FCH: Yo creo que México ha pagado en el pasado y está pagando un alto costo derivado de la inseguridad, y precisamente es el costo que tenemos que medir a la hora de evaluar estas acciones. Es decir, me parece que los costos asociados a combatir la inseguridad con determinación son siempre menores, abismalmente menores, que los costos asociados a simplemente dejar pasar a la criminalidad y que ésta se adueña de los espacios y de las decisiones de los mexicanos. El costo de no hacerlo es infinitamente mayor porque implica, ciertamente, la pérdida del territorio o la pérdida de la propia capacidad del país de determinar su destino.

*JZP: Pero eso equivaldría a considerar que los derechos civiles, los derechos humanos son algo prescindible en esta batalla...*

FCH: Yo creo que afortunadamente estamos en un Estado democrático, y lo exigente de este reto es hacer este combate, esta lucha, en el marco de los derechos humanos; pero sin perder de vista que la mayor amenaza a los derechos humanos en México es la criminalidad.

*JZP: Pero adentro y afuera del país se considera que se está perdiendo en el tema de los derechos humanos...*

FCH: En el ámbito internacional sí hay un problema de información y de percepción que quizá no hemos abordado bien. Y hablo a nombre del gobierno. No se trata de negar la realidad de lo que ocurre en México, pero sí ponerla en una justa dimensión, sobre todo las versiones que aluden al Estado fallido, por ejemplo. Una cosa es un análisis y una crítica, que además es bienvenida, y la otra es decir que aquí el Estado no existe. Aquí tenemos poderes que funcionan bien; un Poder Judicial que yo creo que opera como nunca, con la Suprema Corte en una de sus mejores épocas; el Poder Legislativo robusto y que funciona, y un Poder Ejecutivo que está asumiendo un compromiso muy serio con los problemas más importantes del país.

*JZP: ¿Cuánta responsabilidad tendría el gabinete mismo en estos problemas de comunicación, que hace que se perciba a México adentro y afuera de manera desinformada, como usted dice? Son conocidos los deslices de varios miembros de su gobierno en días recientes.*

FCH: Sin duda hemos fallado en la comunicación, refiriéndome a los comentarios que han hecho colaboradores míos recientemente. Pero el tema es complejo. La canciller hizo una declaración que fue interpretada con mucha virulencia. Pero hay que poner en contexto su afirmación. Lo que la canciller señala, y creo que eso es sustentable con cifras, es que 57% de las muertes vinculadas al crimen organizado el año pasado ocurrieron en tres estados: Chihuahua, Baja California y Sinaloa. De estas muertes, más de 90% se trata de personas asociadas a la criminalidad. Un dato relevante, por ejemplo, es que más de 25% de esas víctimas no han sido identificadas; de hecho de casi la tercera parte, sus cuerpos no son reclamados.

*JZP: Lo cual nos regresaría al deterioro de los derechos humanos. En EL UNIVERSAL acabamos de publicar un reportaje sobre “Las almas muertas”. La justicia ni siquiera investiga estos crímenes, como si no se tratase de seres humanos. Pese a que se trata de asesinatos, ni siquiera por procedimiento son investigados.*

FCH: Las muertes las está explicando una confrontación muy clara entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa con sus respectivos aliados. El cártel de Juárez asociado a Arturo Beltrán Leyva y a Los Zetas; el de Sinaloa está asociado un poco a grupos que actúan en el Pacífico y si no asociado, al menos muy cercano a La Familia. Pero la confrontación es por plazas, concretamente por Tijuana, Culiacán y Ciudad Juárez. Aunque en el caso de Culiacán y de Tijuana los niveles de confrontación, las últimas semanas o meses, ya se han reducido notablemente.

*JZP: ¿Considera usted que también se ha politizado la lucha contra el narcotráfico?*

FCH: Es mucho más complejo que eso. Poca gente advierte que ha habido un cambio medular en la lógica de las organizaciones criminales. En el pasado, los narcotraficantes eran eso: organizaciones enfocadas al trasiego, a traficar la droga. Y punto. Por

su propia naturaleza, este “modelo de negocios” debía tener un bajo perfil. Se concentraba en controlar ciertas rutas y ciudades. Sin embargo, en los últimos años hubo un cambio sustancial: el negocio derivó o se amplió a la distribución y al consumo de la droga en México, y eso cambia totalmente los parámetros de su actividad. Mientras uno [un modelo] implica la discreción y el bajo perfil, el tráfico a Estados Unidos, el otro [modelo] entraña un elemento indispensable que es el control territorial. El control territorial implica un perfil abierto que busca el dominio e incluso el sometimiento de comunidades y de sus autoridades a los intereses de estas mafias.

*JZP: Un cambio de paradigma, pero de enormes consecuencias para todos los mexicanos.*

**FCH:** Consecuencias brutales. El control territorial implica cierta lumpenización de los propios narcotraficantes. Ya no es nada más el típico ex policía judicial que controlaba estos grupos; se trata de bandas criminales en las que deben apoyarse para controlar la plaza. Evidentemente se diversificaron hacia otras actividades criminales: a controlar primero todas las actividades ilícitas, y luego brincaron rápidamente a la extorsión, a los secuestros.

*JZP: El cambio de delincuencia tendría que haber cambiado al propio aparato de justicia, que parece haber quedado obsoleto.*

**FCH:** No sólo eso. Yo creo que había una regla no escrita en el viejo modelo político del país, sin dar ni nombres, ni colores, ni partidos; había una cultura política según la cual el entendimiento implícito era: “Yo no me meto con ustedes porque finalmente lo que hacen es un delito federal, y a mí no me corresponde perseguirlo; ustedes no se meten conmigo, y yo no me meto con ustedes”. No quiero decir que funcionaba, porque esa cultura política permitió la expansión de la criminalidad en el país. Pero cuando cambia el “modelo de negocios” al modelo de control territorial, esta cultura o este entendimiento, simple y sencillamente resulta catastrófica. Los que consideran que deberíamos regresar a “la estrategia” anterior, no se dan cuenta de que eso no es posible. Remitirnos a “dejar hacer y dejar pasar” equivaldría a permitirles el control de la sociedad mexicana. Se están metiendo con los empresarios para extorsionarlos, con las amas de casa, imponiendo su ley en la vida social. Ese mito de que tienen su propio código de ética y que si no nos metemos con ellos entonces no se meterían con nosotros, es falso. Los operativos militares y policíacos masivos que hemos puesto en marcha evidentemente no hacen desaparecer la actividad criminal, pero sí hacen que el Estado pueda fortalecer, recuperar o asumir plenamente el imperio del Estado sobre su propio territorio.

*JZP: Yo creo que hay consenso para dar esa batalla. La pregunta que con todo derecho se hacen los mexicanos es si el presidente tiene alguna idea de cuándo comenzará un punto de inflexión en la espiral de violencia y la criminalidad, que siguen aumentando. ¿Hay alguna previsión de cuándo tocaremos fondo, cuándo comenzaremos a ganar esta guerra?*

**FCH:** Yo creo que sería irresponsable de mi parte hacer pronósticos en el tiempo. El camino de solución implica enfocarnos en los métodos para recomponer esto. Los

métodos correctos nos van a generar los resultados deseados; mientras más nos tardemos en implementarlos, más tardarán los resultados. ¿Qué procesos? Por ejemplo, la desertión militar. En el sexenio pasado hubo una desertión de casi un ejército: de un total de 260 ó 280 mil elementos, salieron casi 130 mil elementos. Eso debe corregirse. ¿Cómo? Estableciendo elementos de lealtad, de arraigo en los propios soldados a su propia militancia. Cuando yo entré a la Presidencia un soldado raso ganaba 2,500 pesos más una compensación, según la zona militar; hoy el soldado raso está ganando por lo menos 7,500 pesos. Mejor vivienda y becas para sus hijos es parte de una solución de fondo a este problema, entre otros aspectos.

## 2. La seguridad pública en México. Síntesis social

*Jorge Tello Peón<sup>2</sup>*

En inteligencia se dice que la disponibilidad de información no garantiza el “conocimiento”, y generalmente se acepta la necesidad de completar un proceso de registro y análisis, para alcanzar conclusiones, que eventualmente puedan llevar a soluciones prácticas.

La gran cantidad de información que “fluye” sobre la seguridad en México, crimen, violencia e impunidad, es asimilada como riesgo a la seguridad personal y se transforma en miedo, confusión, enojo y frustración entre la población. Las noticias recurrentes de hechos cada vez más violentos que suceden a lo largo y ancho del país provocan emoción intensa, aunque se manejan ya como un componente natural del negocio de los medios de comunicación. Este proceso genera una sensación de saturación que “embota” y aturde los sentidos, sin capacidad para construir soluciones y alternativas de acción. La población se convierte en la víctima pasiva de la inseguridad pública.

En este entorno cada día más violento, se ha generado un ánimo nacional de ansiedad y angustia, donde los más pesimistas se convierten en “optimistas bien informados”, y ha motivado que el ciudadano promedio quiera expresarse y termine por ser parte de enormes contingentes que, desde las calles, buscan hacer oír su voz con un grito que es mezcla de ansiedad, reclamo y preocupación, pero que poco ayudará si no se

<sup>2</sup> Presidencia de la República. Opinión personal del autor.